

ITALIA

Paulino César Pardo Prieto

Profesor Titular de Escuela Universitaria
Universidad de León

La mayoría parlamentaria surgida de las elecciones del catorce de abril de 2008, fundamentada en el neofascista partido *Alleanza Nazionale* (Alianza Nacional) de Gianfranco FINI y el conservador y oportunista *Forza Italia* de Silvio BERLUSCONI ha determinado una orientación de la normativa italiana de la XVI Legislatura en contraste con la legislatura anterior. El profundo sentido xenófobo, que relega a una condición jurídica netamente inferior a la población inmigrante —aún la comunitaria— frente a la población nacional, es uno de los signos más visibles, como ha sido notado por otros estados europeos y organizaciones internacionales.

El llamado “*paquete seguridad*” (“*pacchetto sicurezza*”) puesto en marcha entre mayo y julio de 2008 ha conmocionado a la sociedad italiana y a la sociedad internacional si bien parece gozar de amplia aceptación entre los representantes políticos de dentro y fuera de aquel país, como muestra la tendencia en la Unión Europea a regular restrictivamente el flujo migratorio extracomunitario. No obstante la denominación con la que han sido presentadas no es la “*seguridad*” sino la “*criminalización*” del hecho migratorio la característica esencial de estas normas. Así, las conductas relacionadas con la mera presencia ilícita o la ayuda a quienes permanecen en territorio italiano en esa condición son tomadas en consideración junto a otras que tienen por objeto la persecución de las acciones instigadas por la Mafia italiana. Todo un indicio de la idea de “*seguridad*” que se sitúa en

el trasfondo de las normas aprobadas, un Decreto Ley, de 23 de mayo, y una Ley de conversión, de 24 de julio, que va aún más allá de las previsiones restrictivas del primero.

El *Decreto Legge* núm. 92, de 23 de mayo, modificó el vigente Código penal para, independientemente del origen europeo o no del condenado, incorporar a los supuestos que determinan la expulsión del territorio italiano la condena a pena de reclusión superior a dos años (art. 235) o la condena por alguno de los delitos contemplados en el Título I, relativo a “*Delitos contra la personalidad del Estado*” (art. 312). Del mismo modo, se incorpora a las agravantes del artículo 61, la circunstancia de que “*el hecho sea cometido por persona que se encuentre ilegalmente en el territorio nacional*” (art. 11-bis). El Decreto, modifica también el artículo 12 del Texto Único de las disposiciones relativas a la ordenación de la inmigración y normas sobre la condición de extranjero (DL núm. 286, de veinticinco de junio) para incorporar un apartado 5-bis, según el cual: “*Salvo que el hecho constituya un delito mayor, quien cede a título oneroso un inmueble (...) a un ciudadano extranjero que permanezca irregularmente en el territorio del Estado será condenado a la pena de reclusión de seis meses a tres años. La condena firme conllevará la confiscación del inmueble, salvo que pertenezca a persona ajena al delito (...)*”. Finalmente, el Decreto atribuye funciones extraordinarias a los alcaldes en materia de seguridad pública -con la mirada puesta en un mayor control y sanción de la inmigración extranjera- y, adoptando una terminología más apropiada al signo de los tiempos que se abren en Italia, modifica en toda la legislación de aquel país el nombre de una parte de los centros que se ocupan de la inmigración: los hasta ahora “*Centros de Asistencia y Permanencia Transitoria*” pasarán a denominarse “*Centros de Identificación y Expulsión*”.

La *Legge di conversione* núm.125, de 24 de julio de 2008, culmina por el momento el camino abierto por el Decreto, al añadir a las modificaciones por él dispuestas otras dirigidas a perseguir y criminalizar aún en mayor grado la inmigración

irregular. Entre las modificaciones, resultan singularmente llamativas aquellas que consideran delito la falta de cooperación con la autoridad cuando ésta solicita la identificación personal o de terceros (art. 495 del Codice penale); aquellas que abrevian el procedimiento de expulsión (modificaciones al Codice di procedura penale); aquellas que refuerzan la colaboración entre policía local, provincial y nacional (art. 17 de la Ley núm. 128, de 26 de marzo de 2001) y más aún, si cabe, aquellas que innovan el ordenamiento jurídico para facilitar que las Fuerzas Armadas presten eventualmente labores de carácter policial. En este último sentido, el art. 7-bis del Texto refundido y actualizado determina que por un período de tiempo no superior a doce meses un contingente de hasta 3000 unidades puede ponerse a disposición de los prefectos provinciales para desarrollar tareas de vigilancia sobre lugares y objetivos considerados sensibles actuando, en su caso, junto a las fuerzas de seguridad policiales

Dado que la Ley 125/2008 completa el Decreto 92/2008, incorporamos en Anexo el texto actualizado elaborado sobre la base de ambos por el Gobierno italiano y publicado en la *Gazzetta Ufficiale* núm. 173, del día 25 de julio de 2008, págs. 57 - 86. Del mismo modo que en esa edición del texto legal, entre paréntesis, “((...))”, aparecen las novedades introducidas por la Ley núm. 125.

En ese marco, el recurso a la declaración del estado de emergencia en zonas del país donde se produce una mayor y más desordenada presencia de extranjeros se ha convertido en un instrumento propagandístico en contra de la inmigración ilegal sin parangón (véase a modo de ejemplo el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 21 de mayo de 2008, que reproducimos íntegramente a modo de ejemplo).

Y en esa misma línea restrictiva, otra norma, el *Decreto legislativo* núm. 160, de tres de octubre, varía los requisitos para la reagrupación familiar. De un lado, la renta anual mínima exigida para reunir al cónyuge será 7714 € (5142 €, con anterioridad) debiéndose añadir otros 2571 € por cada miembro

de la unidad familiar menor de catorce años o “*dependientes*”²⁶. Para los descendientes mayores de edad, será requerida una situación equivalente a la total invalidez y para los padres, que no cuenten con otros hijos en el país de origen o, si los hubiere, que no estén en disposición de contribuir a su sustento por graves motivos de salud debiendo, además, si su edad fuera superior a los sesenta y cinco años, suscribir un seguro sanitario privado o, al menos, contribuir en los términos dispuestos por un decreto que a día de hoy no ha sido promulgado, al Sistema Sanitario Nacional.

Aún más conflictiva es la previsión de que cuando no conste acreditada fehacientemente a las representaciones diplomáticas o consulares italianas la relación de parentesco podrán requerir al solicitante de la reagrupación –a costa de ésta– la práctica de pruebas de paternidad a través de ADN. El Decreto toma como referencia otras legislaciones europeas, como la francesa, yendo mucho más allá que cualquiera de ellas por su generalidad y la falta de intervención judicial.

²⁶ En situación de “*protezione sussidiaria*” en el sentido dispuesto en el D.lgs. n. 251/2007. Los datos económicos pueden verse en ASGI-Segreteria organizzativa, *Le norme sul ricongiungimento familiare dopo la riforma voluta dal governo Berlusconi*, en www.asgi.it.

ANEXO

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92

Testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica». (G.U. n. 173, del 25-7-2008)

Art. 1.

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:

«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero ((o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea)) sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

((Ferre restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.))

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. ((In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del

fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»);)

b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:

«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero ((o il cittadino appartenente ad uno Stato membro)) dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. ((Ferre restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».))

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. ((In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»);

«b-bis) all'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni»;

2) al secondo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni»;

3) al quarto comma, le parole: «da sette» sono sostituite dalle seguenti: «da nove» e le parole: «da dieci» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici».

4) all'ottavo comma, dopo le parole: «comunque localmente denominate,» sono inserite le seguenti: «anche straniere,»;

5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Associazioni di tipo mafioso anche straniere».

b-ter) l'articolo 495 e' sostituito dal seguente:

«Art. 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non e' inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa all'autorita' giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome»;

b-quater) dopo l'articolo 495-bis, e' inserito il seguente:

«Art. 495-ter (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali). -

Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identita' o di altre qualita' personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria»;

b-quinquies) l'articolo 496 e' sostituito dal seguente:

«Art. 496 (False dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni».

«b-sexies) all'articolo 576, primo comma, e' aggiunto il seguente numero:

"5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"».)

(...)

Art. 2.

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

((«a) all'articolo 51:

(...)

3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente»; »)

a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;

((«a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: «. Distruzione di cose sequestrate"».)

b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole:

«nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione ((antimafia»);)

((b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale»);)

c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:

«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il ((trentesimo)) giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.»;

d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.». ((Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola «quindicesimo» e' sostituita dalla seguente:

«trentesimo»);))

e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti:

«Quando procede a giudizio direttissimo,»;

f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero puo' chiedere», sono sostituite ((dalle seguenti)) «salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;

g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;

h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;

i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;

m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: ((«nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,))

((Art. 2-bis.

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:

«Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata la prioritá assoluta:

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica;

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.»))

((Art. 2-ter.

Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria

1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali e' prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalita' di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere puo' essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006.

Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti degli uffici tengono, altresì, conto della gravita' e della concreta offensivita' del reato, del pregiudizio che puo' derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonche' dell'interesse della persona offesa.

2. Il rinvio della trattazione del processo non puo' avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.

3. Il rinvio non puo' essere disposto se l'imputato si oppone ovvero se e' gia' stato dichiarato chiuso il dibattimento.

4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonche' sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei

processi. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.

5. La parte civile costituita puo' trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla meta' e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale.

7. La richiesta di cui al comma 6 puo' essere formulata anche quando sia gia' stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.))

(...)

Art. 5.

Modifiche ((al testo unico di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

((01. All'articolo 12, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta".))

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

((«5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilita', ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.)) La condanna con provvedimento irrevocabile ((ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena,)) comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».

((1-bis) all'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola:

«quindici» e' sostituita dalla seguente: "sette"».

1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «con la

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.))

Art. 6.

Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:

«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone ((preventivamente)) il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, ((adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,)) al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono ((preventivamente)) comunicati al prefetto anche ai fini della

predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

((4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana.))

5. Qualora i provvedimenti ((adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino)) conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

((5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.))

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

((Art. 6-bis.

Modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente:

«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma».)

Art. 7.

((Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio))

((1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.

2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalita' di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato».)

((Art. 7-bis.

Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio

1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo' essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unita'.

2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».)

(...)

Art. 9.

Centri di identificazione ed espulsione

1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti:

«centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.

(...)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 21 maggio 2008.**

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunita' nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia. (GU n. 122 del 26-5-2008)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerata la situazione di estrema criticita' determinatasi nel territorio della regione Lombardia, a causa della presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle aree urbane;

Considerato che detti insediamenti, a causa della loro estrema precarieta', hanno determinato una situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali;

Considerata la situazione in cui versa il territorio della citta' di Milano, in cui la presenza dei nomadi e' stimata in circa seimila unita', e dove all'interno dello stesso insediamento urbano sono sorti accampamenti abusivi in aree industriali dismesse nei quali confluisce la grande maggioranza della popolazione nomade;

Considerata la particolare conformazione urbanistica della citta' di Milano, in cui i confini dei numerosi comuni limitrofi giungono in un'area molto prossima al perimetro urbano del capoluogo di regione, con conseguente impossibilita' di adottare soluzioni finalizzate ad una sostenibile distribuzione delle comunita' nomadi senza il coinvolgimento di tutti gli enti locali interessati;

Considerato che la medesima situazione di elevata criticita' interessa anche le provincie di Napoli e Roma, dove si registra

un'elevata presenza di comunita' nomadi nelle aree urbane e zone circostanti, con insediamenti in larga misura abusivi;

Considerato altresì che la sopra descritta situazione ha determinato un aumento dell'allarme sociale, con gravi episodi che mettono in serio pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica;

Considerato che la predetta situazione, che coinvolge vari livelli di governo territoriale, per intensità estensione, non è fronteggiabile con gli strumenti previsti dalla normativa ordinaria;

Visto il «Patto per Milano sicura», sottoscritto in data 18 maggio 2007 dal prefetto di Milano ed il sindaco di Milano;

Visto il «Protocollo d'intesa per la realizzazione del piano strategico emergenza rom nella città di Milano» siglato il 21 settembre 2006 dal prefetto di Milano, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della provincia ed il sindaco di Milano;

Visto il «Patto per Roma sicura» sottoscritto in data 18 maggio 2007 dal prefetto di Roma, dal presidente della regione Lazio, dal presidente della provincia ed il sindaco di Roma;

Viste le note del 14 e 16 maggio 2008 con cui il Ministro dell'interno, rappresentando la grave situazione determinatasi, ed il concreto rischio che degeneri ulteriormente, ha richiesto l'urgente adozione di misure di carattere eccezionale;

Ritenuto quindi necessario il ricorso a mezzi e poteri straordinari per il superamento dell'emergenza in rassegna, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in

premessa, e' dichiarato, fino 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunita' nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lombardia e Lazio.

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2008 Il Presidente: Berlusconi

DECRETO LEGISLATIVO núm. 160, de 3 de octubre de 2008.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.º 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare. (GU n. 247 del 21-10-2008)

Art. 1.

1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;

b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando

sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.»;

c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.»;

d) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

